

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 10, 11, 12 y 14: Téngase presente.

Al folio 13: No ha lugar.

Vistos:

Comparece Carlos Zepeda Suárez, abogado, en favor de las siguientes personas: María Angélica Saffie González, cédula nacional de identidad N°5561443-1, con domicilio en Pardo número 629, comuna de Melipilla; Ana Paulina Saffie González, cédula nacional de identidad N°6152818-0, con domicilio en Camino a Melipilla, kilómetro 43, parcela 29, condominio Santa María, comuna de Talagante; Faride del Pilar Saffie González, cédula nacional de identidad N°6182215- 1, con domicilio en Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla; Thomas Marcello Salisbury, cédula nacional de identidad N°9726553-4, con domicilio en Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla; María Soledad Gemita Saffie Forner, cédula nacional de identidad N°6916846-9, con domicilio en Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla; Ángel Marcelo Saffie Forner, cédula nacional de identidad N°16656596-0, con domicilio en Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla; María Eugenia Núñez Bravo, cédula nacional de identidad N°7035197-8, con domicilio Avenida 3 Poniente N° 240, Villa Clotario Blest, Comuna de Melipilla; Sergio Luis Saffie Nuñez, cédula nacional de identidad N°16173365-2, con domicilio Avenida 3 Poniente N° 240, Villa Clotario Blest, Comuna de Melipilla; Marcela Paz Gemita Saffie Nuñez, cédula nacional de identidad N°16920939-1, con domicilio Avenida 3 Poniente N° 240, Villa Clotario Blest, Comuna de Melipilla; Jorge Jacobo Musa Saffie, cédula nacional de identidad N°12.264.911-3, con domicilio Arturo Prat N° 650, comuna de Melipilla; Ana María Fuentes Saffie, cédula nacional de identidad N°8031279-2, con domicilio Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla; y Camila Fernanda Reyes González, Cédula nacional de identidad N°18214190-9, con domicilio en Ortúzar número 562, local número cuatro, comuna de Melipilla, interpone acción constitucional de amparo en contra de la resolución de 26 de enero de 2025 dictada por el juez árbitro de derecho, Juan Pablo Núñez Moya, quien en los autos arbitrales sobre partición de bienes



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXTYQTM

caratulado “INMOBILIARIA AMAL LIMITADA con INMOBILIARIA REYES SPA y OTROS”, ROL P-10-2022, decretó que los amparados sufran un arresto por 7 días, pronunciamiento judicial que resulta arbitrario e ilegal, y produce una perturbación y amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de las personas en cuyo favor se recurre.

Expone que la causa se origina a partir del proceso de partición de la herencia dejada por la Sra. Ana Luisa Campos Calderón, respecto del inmueble ubicado en calle Ortúzar N° 560, 564, 572 y 576, comuna de Melipilla. El procedimiento se inició el 22 de julio de 2019, cuando la Inmobiliaria Amal Limitada solicitó al Primer Juzgado de Letras de Melipilla la citación a comparendo para la designación de juez árbitro partidor, recayendo dicha designación en el Sr. Juan Pablo Núñez Moya mediante sentencia de 15 de septiembre de 2021.

Indica que el juez árbitro, una vez aceptado el cargo, convocó a las partes al primer comparendo el 25 de octubre de 2022, donde se establecieron las bases del procedimiento particional. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2023, el juez dictó una resolución en la que se designó como administradora proindiviso a la Sra. Silvia Lucía Azocar Aravena, a solicitud de Inmobiliaria Amal Limitada, sin realizar la audiencia previa con los comuneros ni cumplir con las exigencias de quórum que establecen los artículos 655 y 656 del Código de Procedimiento Civil.

Refiere que dicha designación fue impugnada por los comuneros mediante recursos de reposición con apelación en subsidio y, posteriormente, con un recurso de queja disciplinaria (Rol Administrativo 2174-2024), al considerarse ilegal y arbitraria. Pese a ello, el juez árbitro continuó impartiendo instrucciones para que los comuneros realizaran pagos relacionados con los honorarios de la administradora, peritajes sobre el inmueble, abogados externos e incluso adelantos de sus propios honorarios, sin que dichas instrucciones se plasmaran en resoluciones formales, sino que se consignaban de manera genérica en las actas de comparendos.

Menciona que uno de los hitos relevantes fue la incorporación al expediente arbitral de un informe pericial elaborado por el perito tasador Nicolás Pozo Rodríguez, acompañado el 11 de octubre de 2024 sin previa citación a las partes,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

lo que impidió que los comuneros formularan observaciones o impugnaciones al referido documento.

Agrega que el 10 de diciembre de 2024, el abogado Jaime Jiménez Villavicencio, en representación de Inmobiliaria Amal Limitada, solicitó que se certificara que no se habían interpuesto impugnaciones contra el informe pericial y pidió la aplicación del apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, consistente en el arresto de los comuneros por supuesta rebeldía, sin especificar cuáles resoluciones habrían sido incumplidas.

Señala que el juez árbitro ordenó la certificación de la ejecutoriedad, pero no se pronunció sobre el apercibimiento. No obstante, con fecha 12 de febrero de 2025, se certificó la ejecutoriedad, tras lo cual el abogado Jiménez Villavicencio reiteró la solicitud de arresto. Finalmente, con fecha 26 de febrero de 2025, el juez árbitro acogió la petición y dispuso el arresto por 7 días para cada comunero, medida que debía ser cumplida en el Centro Penitenciario de Talagante, a cargo de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile.

La resolución impugnada se funda en instrucciones que carecen de la debida formalidad, sin que se identifiquen las resoluciones específicas cuyo incumplimiento se imputa, lo que vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, configurando la arbitrariedad e ilegalidad que motiva la acción de amparo constitucional.

En lo que respecta al derecho, señala que los jueces árbitros no tienen facultad legal para dictar o decretar órdenes de arresto y que incluso, en el eventual caso en que se pudiese concluir que pueden decretar directamente detenciones, en este caso en concreto son ilegítimas al ser desproporcionada y contraria a instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Solicita se dé lugar en todas sus partes al presente arbitrio constitucional, se ordene dejar sin efecto la resolución impugnada y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado que se estimen procedentes, restableciendo la perturbación y amenaza a la libertad individual y seguridad personal de los amparados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTM C

Informa Sebastián Yuraszeck en representación del juez árbitro recurrido, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Señala que no existe ninguna orden de arresto dictada por el árbitro don Juan Pablo Núñez Moya que amenace la libertad o seguridad personal de los recurrentes, ya que el juez árbitro carece de facultad de imperio para decretar medidas de apremio. La resolución de fecha 26 de febrero de 2025 solo hizo lugar a una solicitud de apercibimiento presentada por Inmobiliaria Amal Limitada, ordenando exhortar al 1° Juzgado de Letras de Melipilla para que dicho tribunal — único con facultades para ello— pudiera despachar eventualmente la orden de arresto u otra medida compulsiva. Añade que no consta que el exhorto haya sido tramitado ni tampoco que el tribunal ordinario haya despachado la orden, conforme a las revisiones efectuadas en la Oficina Judicial Virtual y los estados diarios del tribunal.

Sostiene que la resolución impugnada no es ilegal, ya que fue dictada dentro de las facultades legales del árbitro conforme a las bases del arbitraje y las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La designación de don Juan Pablo Núñez Moya como árbitro partidor fue decretada mediante resolución firme y ejecutoriada en los autos Rol C-2885-2019 del 1° Juzgado de Letras de Melipilla, encontrándose plenamente vigente hoy en día. La resolución fue debidamente fundamentada, autorizada por el ministro de fe del tribunal arbitral y dictada en respuesta a una solicitud de la comunera Inmobiliaria Amal Limitada, cumpliendo con los requisitos procesales.

Añade que la resolución tampoco es arbitraria, ya que responde al mérito del proceso y a las reiteradas solicitudes de apercibimiento presentadas por Inmobiliaria Amal Limitada debido al incumplimiento de los recurrentes para entregar dineros y la administración de los arriendos que forman parte de la masa común. El árbitro dio lugar a la solicitud en virtud del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente en el ordenamiento jurídico, por lo que su decisión obedece a una obligación jurisdiccional y no a un acto caprichoso o carente de fundamento.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

Indica que los recurrentes no han interpuesto ninguno de los recursos procesales ordinarios que establece el Código de Procedimiento Civil para impugnar la resolución, razón por la cual no corresponde recurrir a la acción constitucional de amparo, que posee un carácter excepcional y no puede sustituir las vías ordinarias de impugnación.

Además, afirma que la medida de apremio por siete días resulta proporcional, considerando que el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil permite fijar arrestos hasta por dos meses. La decisión se adoptó en virtud de la conducta contumaz y renuente de los amparados para cumplir las resoluciones judiciales, lo que ha dificultado la labor del administrador proindiviso y ha causado un daño patrimonial a la comunidad.

Finalmente, precisa que la queja disciplinaria presentada por los recurrentes ante la Corte de Apelaciones fue rechazada en su totalidad por el Pleno del Tribunal de Alzada, lo que respalda la legalidad y corrección de las actuaciones del árbitro.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso, o bien, toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Para resolver el asunto planteado por quienes han accionado de amparo debe analizarse la naturaleza jurídica de este arbitrio constitucional, en cuanto se trata de un procedimiento de emergencia de cautela que protege la garantía y derecho a la libertad ambulatoria o de desplazamiento y la seguridad individual de las personas, cuya importancia precisamente deriva en que es



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

necesaria una resolución rápida, concreta y de inmediata eficacia, en un procedimiento desformalizado con el objeto de averiguar si la decisión de la libertad en cualquiera de sus formas ha sido ilegal, según dispone el artículo 21 de la Carta Fundamental.

Tercero: En la especie, el amparo pedido se funda en el mérito de la resolución del juez partidor recurrido de veintiséis de febrero pasado, de cuyo tenor se extrae que mediante ella se ha hecho lugar al apercibimiento solicitado, conforme a la norma del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, aludiendo expresamente a uno de los apremios previstos en ella, esto es, a un arresto de hasta por 7 días, en razón del incumplimiento de los amparados en relación con la orden de entrega de la administración de lo común a un administrador pro indiviso, así como la orden de depositar ciertos dineros percibidos, según daría cuenta cierto peritaje evacuado en la causa y que no fuera objetado u observado.

Cuarto: En referencia a la facultad de imperio de los tribunales de justicia, reconocida constitucionalmente, lo cierto es que la judicatura arbitral se caracteriza por carecer de aquella, razón por la cual, aunque el árbitro ejerce jurisdicción, no puede ordenar por sí mismo la fuerza coercitiva con la que cuenta el poder público, en tanto compuesto por autoridades en cuya función se comprometen los intereses sociales.

Dicho de otra manera, las resoluciones arbitrales sí son exigibles, pues son capaces de tener mérito ejecutivo en sí mismas, la distinción viene dada para el caso que su ejecución y cumplimiento precise de procedimientos de apremio o el empleo de medidas compulsivas, caso en el cual, atendido que el árbitro está impedido de ordenar el auxilio o el empleo de la fuerza pública, deberá ocurrirse ante la justicia ordinaria.

En este punto, cabe recordar que de acuerdo al inciso final del artículo 635 del Código de Procedimiento Civil *“(...) cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

Quinto: En el presente caso, según se anotó en el considerando tercero, el árbitro recurrido ha hecho efectivo un apercibimiento, sin aludir siquiera someramente a la resolución que lo habría decretado, entendiéndose por esto último aquella en que se instó a una parte de los litigantes o interesados a dar cumplimiento a una determinada resolución en conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, en realidad, no es el punto de partida relevante para zanjar el arbitrio en estudio, puesto que como quiera que sea el artículo 238 ya citado se endereza justamente en medidas de apremio susceptibles de ser dictadas con respecto al que incumpla una resolución judicial y, por lo tanto, en las que participa el poder coercitivo o compulsivo para la ejecución con el que cuenta el juez ordinario, pero no el árbitro, este último, imprescindiblemente, debió abstenerse de todo ello, ordenando pasar los autos al juez de letras competente para que, dentro de sus facultades, dispusiera lo conducente al cumplimiento de aquello a lo que una o más de las partes se mostraba renuente.

Sexto: Dado todo lo precedente, resulta que al ser los apercibimientos legales una herramienta procesal que debe ser interpretada y aplicada estrictamente por el juez permanente, su introducción al proceso, lo mismo que su procedencia y concreción, deben ser determinadas por este último, sin que quepa en este rol la superposición del juez partidor, como ha ocurrido en la especie, tanto así que el árbitro señor Núñez llega incluso a puntualizar la que, en su concepto, sería la medida de apremio pertinente.

Séptimo: De ese modo, dado que la resolución adoptada por el recurrido señor Núñez ha desobedecido el límite de sus facultades legales, tornándose a lo menos en una amenaza a la libertad ambulatoria de los recurrentes, por cuanto se refiere a su arresto como medida compulsiva para que cumplan con lo que tienen ordenado en el proceso, la acción ejercida en autos encuentra el sustento suficiente para conducir a esta Corte a su acogimiento, en los términos que enseguida se dirán.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excm. Corte



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

Suprema sobre la materia, **se hace lugar, sin costas, al recurso de amparo** deducido en favor de María Angélica Saffie González, Ana Paulina Saffie González, Faride del Pilar Saffie González, Thomas Marcello Salisbury, María Soledad Gemita Saffie Forner, Ángel Marcelo Saffie Forner, María Eugenia Núñez Bravo, Sergio Luis Saffie Nuñez, Marcela Paz Gemita Saffie Nuñez, Jorge Jacobo Musa Saffie, Ana María Fuentes Saffie y Camila Fernanda Reyes González, en contra del juez recurrido, Juan Pablo Núñez Moya, en cuanto se ordena a este último que, para el cumplimiento de las resoluciones del procedimiento de partición que tiene a su cargo y lleva adelante, se ocurra a la justicia ordinaria para la ejecución o cumplimiento de lo resuelto, en tanto ello sea procedente en virtud de una resolución firme y amerite apremios u otras medidas compulsivas para cobrar efectiva realidad en el proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°296-2025 Amparo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Alejandra Pizarro S., Ministro Suplente Christian Carvajal S. y Abogada Integrante Paula Manzo S. San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

En San Miguel, a cuatro de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NZZCXYQTMC